ras y documentos de Aduanas correspondientes a bienes adquiridos o importados y servicios recibidos en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, así como las demás adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios recibidas, y que en el número 4 del mismo artículo se dispone que en el Libro de Registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de Aduanas, reflejando su número de recepción, fecha, nombre y apellidos o razón social del proveedor, base imponible, tipo tributario y cuota.

Dados los términos de las normas indicadas en el Libro de Registro de facturas recibidas deberán anotarse todas las facturas recibidas, incluso las que se refieran a operaciones por las que se hayan soportado cuotas no deducibles, debiendo consignarse en el registro de dichas facturas todos los datos exigidos con carácter general;

Considerando que el Real Decreto-ley 6/1985, de 18 de diciembre, de adaptación de la imposición indirecta en Canarias, Ceuta y Melilla («Boletín Oficial del Estado» de 23 de diciembre de 1985), dispone en su artículo 1.º que continuará vigente en dichos territorios el Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y las demás disposiciones reguladoras de dicho Impuesto;

Considerando que el artículo 26 del citado texto refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, aprobado por Real Decreto 3314/1966, de 29 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1967), establece que quedan sujetos al Impuesto los transportes de todas clases realizados por Empresas españolas o extranjeras utilizando medios propios o ajenos de locomoción, y que el Impuesto se exigirá cuando los transportes comiencen o finalicen en territorio español.

Considerando que la disposición adicional del Real Decreto-ley 6/1985, de 18 de diciembre, preceptúa que para la determinación del lugar de realización del hecho imponible se estará a lo dispuesto en los artículos 12, 2, 3.º, y 13 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto;

Considerando que el artículo 13, número 2, apartado 2.º, de la Ley 30/1985, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1985), establece que los transportes se considerarán realizados en el territorio de aplicación del Impuesto o en otros territorios por la parte de trayecto realizada en cada uno de ellos;

Considerando que el artículo 13, número 2, apartado 3.º, letra c), de la citada Ley dispone que los servicios accesorios a los transportes se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente;

Considerando que el artículo 15 de la Ley 30/1972, de 22 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio), sobre el Régimen Económico-Fiscal de Canarias, establece que no se exigirá el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que corresponda a los transportes entre las distintas islas del archipiélago o entre éstas y el resto del territorio nacional, debiendo también entenderse comprendidos en la no sujeción los transportes desde el resto del territorio nacional con destino a Canarias;

Considerando que el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, limita la facultad de formular consultas vinculantes en virtud de dicho precepto a las consultas referentes al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que el artículo 1.º, apartado 4.º, del citado Real Decreto-ley 6/1985, de 18 de diciembre, establece que los tipos impositivos aplicables en el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas serán los vigentes en 1985;

Considerando que la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985 («Boletín Oficial del Estado» número 313, de 31 de diciembre de 1985), en su artículo 63 estableció que el tipo impositivo aplicable con carácter general en el citado tributo será el del 4 por 100;

Considerando que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22 del texto refundido del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, están sujetas al citado tributo las prestaciones de servicios realizadas con carácter habitual y mediante contraprestación en las islas Canarias;

Considerando que según lo prescrito en el artículo 38 del Reglamento del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, aprobado por Real Decreto 2609/1981, de 19 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviembre), con carácter general y, salvo las excepciones reguladas en dicho Reglamento, el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas exigible en Canarias se autoliquidará por el sujeto pasivo mediante declaración con arreglo a modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda que deberá presentarse en la Delegación de Hacienda correspondiente al domicilio tributario del sujeto pasivo;

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la «Petita i Mitjana Empresa de Catalunya» (PIMEC), que únicamente tendrá eficacia vinculante en las cuestiones referentes al Impuesto sobre el Valor Añadido:

Primero.-La eficacia de las exenciones establecidas en el artículo 15, número 5, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido quedará condicionada a que se acredite la salida de las mercancías con destino al extranjero o a Canarias, Ceuta o Melilla mediante copia del correspondiente documento aduanero.

A estos efectos, podrá utilizarse la declaración de salida o exportación, los manifiestos de carga, conocimientos de embarque, sobordos, documentos de tránsito, cuadernos TIR o cualesquiera otros intervenidos por la Aduana en los que resulten claramente identificados los bienes que se exporten.

La intervención de la Aduana se hará constar mediante diligencia o sello de la misma.

Las copias o fotocopias de los documentos aduaneros no deberán estar necesariamente autenticadas, pero si reproducir con fidelidad el documento original, sin perjuicio de las comprobaciones complementarias que la Administración considere necesario realizar.

Segundo.-Las exenciones correspondientes a las prestaciones de servicios directamente relacionados con contenedores importados en régimen de importación temporal quedarán condicionadas a la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.º Que los servicios se presten a los empresarios o profesionales importadores de dichos contenedores.

2.º Que dichos servicios se refieran directamente a dichos bienes.

3.º Que se cumplan los demás requisitos establecidos en la legislación aduanera.

Tercero.-La base imponible de la importación de bienes estará integrada por el valor en Aduana, los tributos devengados con ocasión de la importación y los gastos accesorios y complementarios hasta la descarga inclusive de las mercancías en el primer lugar de destino.

La justificación de los gastos incluidos en la base imponible de la importación se realizará mediante copia de la declaración de importación en la que se acredite la inclusión de los referidos servicios en dicha base.

Las normas reguladoras del Impuesto Sobre el Valor Añadido no exigen como requisito para la validez de la referida copia el de su autenticación, sin perjuicio de las comprobaciones complementarias que la Administración considere necesario realizar.

Cuarto.-No podrán ser objeto de deducción ni devolución las cuotas soportadas por los servicios de desplazamientos, viajes, hostelería y restaurante prestados a los tripulantes de Compañías extranjeras.

Quinto.-Las facturas correspondientes a operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán también ser objeto de anotación en el Libro Registro de facturas emitidas.

Sexto.-Las facturas correspondientes a operaciones por la que se hayan soportado cuotas que, de acuerdo con la normativa del Impuesto Sobre el Valor Añadido, no sean deducibles deberán también ser objeto de anotación en el Libro Registro de facturas recibidas.

Séptimo.-Están sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas los transportes de todas clases que comiencen o finalicen en las islas Canarias, por la parte de trayecto realizado en dichos territorios, incluidas sus aguas jurisdiccionales.

No obstante, estarán exentos de dicho Impuesto los transportes procedentes o con destino al resto del territorio nacional y tampoco se exigirá el impuesto que corresponda a los transportes entre las distintas islas del Archipiélago.

No se considerarán procedentes de territorios españoles los transportes originarios del extranjero, aunque se efectúen operaciones de transbordo en dichos territorios.

El tipo impositivo aplicable será el del 4 por 100.

El Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas se exigirá mediante declaración liquidación que deberá presentar el sujeto pasivo en la Delegación o Administración de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal.

Octavo.-Están sujetos al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas los servicios accesorios al transporte prestados materialmente en las islas Canarias.

Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Director general, Miguel Cruz Amorós.

10205 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de marzo de 1986, por el que la Asociación de la Prensa Valenciana formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de 4 de marzo de 1986, por el que la Asociación de la Prensa Valenciana formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la referida Asociación es una organización profesional autorizada para formular consultas vinculantes en relación a dicho tributo en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 28);

Resultando que el objeto de la consulta es determinar si están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las siguientes operaciones:

1.º Servicios de colaboración prestados a diversos medios informativos consistentes en el envío de guiones o artículos mediante remuneración.

2.º Servicios prestados por los corresponsales de los medios informativos cuya remuneración se acuerda por cada intervención, teniendo en cuenta que dicha actividad es para el corresponsal una segunda ocupación.

Los referidos servicios no se prestan en régimen de dependencia derivado de relaciones laborales o administrativas.

Considerando que el artículo 4.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31), establece que están sujetas al Impuesto:

1.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las Entidades que las realicen.

2.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas sin contraprestación comprendidas en los artículos 10 y 12 de dicho Reglamento.

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.º del Reglamento del Impuesto citado, a los efectos de dicho tributo se reputarán empresarios o profesionales las personas que realicen habitualmente y por cuenta propia actividades empresariales o profesionales.

La habitualidad consiste en la realización continuada, o como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de abril de 1907, en «la práctica ordinaria y frecuente», de entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados a título oneroso y por cuenta propia.

El Alto Tribunal, en la sentencia citada ha puesto de manifiesto que no puede calificarse como habitual «la ejecución aislada de algún acto comercial exigido por las necesidades de la vida».

La reiteración y frecuencia de la realización de las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido se manifiesta de forma diferente según las características y circunstancias de las diversas actividades empresariales o profesionales y la duración de los ciclos de producción o distribución de los bienes.

A efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido la habitualidad puede consistir en la realización ordinaria y frecuente de operaciones sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido o en la ejecución de una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporado con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, como sucede, en todo caso, con los arrendamientos de bienes.

Considerando que el artículo 6.º, número 2, del Reglamento del Impuesto, preceptúa que la habitualidad podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho.

Se presumirá la habitualidad, salvo prueba en contrario:

a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3.º del Código de Comercio.

b) Cuando para la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 4.º del Reglamento mencionado se exija contribuir por la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o de Actividades Profesionales y Artísticas.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación de la Prensa Valenciana:

Primero.—Los colaboradores y los corresponsales de medios informativos que presten con habitualidad, por cuenta propia y mediante contraprestación, los servicios propios de su actividad, desarrollan una actividad empresarial o profesional sujeta y no exenta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segundo.—La habitualidad que determina la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios prestados por colaboradores y corresponsales consiste en la realización continuada de las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se entenderá que dichos colaboradores y corresponsales de medios informativos realizan continuadamente operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando efectúen ordinaria y

frecuentemente prestaciones de servicios de remisión de artículos, guiones o, en general, colaboraciones.

Tercero.—No están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las operaciones realizadas por quienes, actuando al margen o con independencia del ejercicio de una actividad empresarial o profesional, presten algún servicio aislado de los anteriormente mencionados.

Madrid, 31 de marzo de 1987.—El Director general, Miguel Cruz Amorós.

10206 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecha 30 de junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la mencionada Cámara Oficial está autorizada para formular consultas vinculantes en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 28);

Resultando que determinadas empresas dedicadas a la enseñanza editan sus propios libros de texto;

Resultando que se formula consulta en relación con el régimen de deducción aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido a dichas empresas y, en particular, sobre la obligatoriedad de aplicar la regla de prorata especial;

Resultando que se consulta igualmente si las referidas empresas están obligadas a solicitar autorización de la Administración para la aplicación de la regla de prorata especial;

Considerando que el artículo 67, números 1 y 2, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31), dispone que los sujetos pasivos que realicen actividades empresariales o profesionales diferenciadas deberán aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada una de ellas.

No obstante, la opción por la aplicación de la regla de prorata especial surtirá efectos respecto de todas las actividades realizadas por el sujeto pasivo, excepto las incluidas en los regímenes especiales simplificados, de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia.

Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores de actividad diferenciados será de aplicación lo establecido en el artículo 70, número 2, y siguientes del mismo Reglamento para determinar el porcentaje de deducción aplicable respecto de las adquisiciones de dichos bienes, computando al efecto la totalidad de las operaciones empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se considerarán sectores de actividad empresarial o profesional diferenciados los definidos en el artículo 10, apartado 3.º, letras a) y b) del citado Reglamento;

Considerando que, según establece el artículo 10, apartado 3.º, letra a), del Reglamento del Impuesto, a tales efectos se considerarán sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional aquellos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción aplicables sean distintos.

Son actividades económicas distintas aquellas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 2518/1974, de 9 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 12 de septiembre), y demás disposiciones complementarias.

No se reputará a estos efectos distinta la actividad accesoria a otra principal que contribuya a su realización cuando el volumen de operaciones realizado el año precedente en dicho sector de actividad no excediera del 5 por 100 del de la principal.

Los regímenes de deducción a que se refieren los párrafos anteriores se considerarán distintos si los porcentajes de deducción que resultarían aplicables en cada uno de los sectores económicos, determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento del Impuesto, difiriesen entre sí en más de 50 puntos porcentuales;

Considerando que el artículo 6.º del Decreto 2518/1974, de 9 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 12 de septiembre), atribuye grupos diferentes en el Censo Nacional de Actividades Económicas a las actividades de edición de textos y a la de enseñanza.